

AMENAZA PARAMILITAR EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA RESCATAR POR MEDIO DEL PERIODISMO LAS MEMORIAS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Pompilio Peña Montoya¹

RESUMEN

En el contexto de posacuerdo en que vivimos y en el que hemos emprendido como país la tarea de rescatar las memorias de un conflicto que duró más de sesenta años, el periodismo debe superar el cubrimiento simplista de noticias y aportar al esclarecimiento de la verdad aprovechando su carácter mediador y emisor de discursos. Este ensayo es una invitación para que los periodistas indaguen sobre temas que perdieron de vista durante décadas –manifestaciones de violencia como la amenaza de muerte– y le abran las puertas a aquellas víctimas que tuvieron que desviar el curso de sus vidas por defender puntos de vista e ideales de una sociedad más justa. Al final del artículo se presenta el breve relato de un líder estudiantil de los años noventa, amenazado de muerte por paramilitares.

Palabras clave: Periodismo y memoria, amenaza, violencia política, universidad pública, conflicto armado, paramilitarismo, UdeA.

¹ Periodista de la Universidad de Antioquia. Estudiante de la Maestría en Periodismo de la misma universidad. **Correo electrónico:** pompilio.pena@udea.edu.co

AMENAZA PARAMILITAR EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA RESCATAR POR MEDIO DEL PERIODISMO LAS MEMORIAS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Introducción

El drama del conflicto armado no solo lo sufren los combatientes de cada bando. Lo padecen también líderes comprometidos con ideales sociales y políticos, cuyo enemigo deja de ser el rostro de la injusticia social y adquiere, de repente, la anónima imagen de una amenaza de muerte. Aunque aparecen desde hace años en titulares y notas informativas, el periodismo poco ha indagado sobre las causas y consecuencias de estos mensajes que van dirigidos a dislocar la libertad de un individuo. La profesora Ana María Miralles describe este fenómeno así: el periodismo se pierde en los detalles y se le escapan los problemas (2011, p. 205).

En este artículo nos centraremos en la importancia de que el periodismo profundice en la lectura de este tipo de violencia, para arrojar luz sobre una trasgresión que mina, en diferentes niveles, esferas tanto personales como sociales de las víctimas. Este propósito adquiere notoriedad cuando hoy en el país existen esfuerzos (civiles, académicos e institucionales) por reconstruir y comprender el conflicto armado colombiano a través del rescate de memorias colectivas, donde la voz de las víctimas predomina.

Comencemos por saber que el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) define la amenaza como “la manifestación de violencia contra una persona por parte de agentes directos o indirectos del Estado, que la colocan en situación de víctima potencial de agresiones contra su vida o integridad, afectando su estabilidad psíquica” (2017, p. 18). Por su parte, el Código Penal Colombiano establece en su artículo 347 que quien por cualquier medio “atemorice o amenace” a una o varias personas “con el propósito de causar alarma, zozobra o terror”, incurrirá en una conducta que podría darle entre cuatro y ocho años de prisión. Paradójicamente, a pesar de ser un delito tan recurrente en el país, los niveles de impunidad judicial sobre él son altísimos.

Las amenazas de muerte buscan deteriorar la dignidad de las personas, limitar el desarrollo y la expresión crítica, el bienestar y la realización plena de derechos. Tras ser manifestadas, ya sea en panfletos, llamadas o recados, la víctima queda atrapada en un entramado judicial sin salida. En los informes que las universidades públicas han entregado a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, algunos capítulos profundizan en asesinatos, secuestros, atentados, torturas y, por supuesto, amenazas, que obligaron a miembros de la comunidad universitaria a renunciar a ideales, e incluso a huir al exilio.

De hecho, tras la creación en 2012 de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a partir de la Ley 1448 de 2011², universidades como la del Atlántico, la de Córdoba y la Popular del Cesar fueron reconocidas como sujetos de reparación colectiva al demostrar las afectaciones que sufrieron en la segunda mitad de los años 90 y la primera década del milenio. Los informes profundizan en este periodo no solo por el amplio abanico de violencias protagonizadas por el paramilitarismo en las universidades públicas, sino porque las autoridades policiales y militares, en complicidad con los medios de comunicación, construyeron un escenario adverso para la comunidad universitaria y propagaron versiones y realidades hoy cuestionadas por trabajos de investigación. En síntesis, gran parte de la opinión pública de esos años veía en las manifestaciones de protesta y resistencia universitaria el epítome de la subversión, una idea impulsada por la hegemonía, materializada en los poderes públicos, así como por la fuerza pública y su ‘doctrina de seguridad nacional’. Sobre esto se profundizará más adelante.

En este sentido, Armando Aguilera manifiesta que lo más “lesionador” para la vida psíquica de las víctimas de la violencia política es tener que aprender a vivir en medio de las pérdidas,

tener que actuar como si nada estuviese pasando, pues la estrategia psicológica del conflicto armado es la de conducir al sujeto a experiencias inenarrables, de lo inenarrable, a fin de que la persona quede sumida, en la mayoría de las veces, en una vivencia de destrucción de su cuerpo, de su yo, de su mundo (2003, p. 12).

Violencia política en la Universidad de Antioquia

La amenaza se ha presentado en las universidades públicas como una expresión de la violencia política. Este tipo de violencia se entiende como “aquella ejercida como medio de lucha político-social, ya sea con el fin de mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también con el fin de destruir o reprimir a un grupo humano” (Cinep, 2017, p.14).

En esta hostil espiral de violencia estuvieron (y están) insertos cientos de estudiantes, docentes, administrativos, pensionados y empleados de las universidades públicas. De hecho, a finales de 2020 en una jornada de diálogo y reflexión fue dado a conocer el informe *Conflicto en el campus: la generación que no aprendió a rendirse*, realizado por comités especializados de las universidades públicas del Atlántico, Magdalena, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre. En el evento, el exjefe paramilitar Édgar Fierro admitió las persecuciones y muertes que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ordenaron durante los años noventa, luego de recibir la “orden” de “desarticular las redes ideológicas y logísticas de lo que, en ese momento, se tenía información eran afectas [cercasas] a las Farc o

² La reparación y la reconstrucción de la memoria histórica de las víctimas del paramilitarismo está amparada por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, consignada en la Ley 1448.

al ELN”. Delante de las víctimas, Fierro aseguró que las listas de los estudiantes amenazados provenían de organismos de seguridad del Estado.

La Universidad de Antioquia está en proceso de reconstruir sus memorias con la ayuda de diferentes disciplinas. Destacan trabajos como los de la socióloga María Teresa Uribe³, así como investigaciones realizadas por el Instituto de Estudios Políticos, el Instituto de Estudios Regionales, el proyecto periodístico Hacemos Memoria y las tesis de grado de estudiantes que han analizado el efecto de la violencia política en la institución.

Entre tantos periodos de violencia que ha atravesado la de Antioquia en este artículo nos proponemos recorrer ese que ocurrió entre los noventa y los dos mil. En 1996, cuando se dio a conocer la existencia de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá⁴ y de su comando Universidad de Antioquia (AUdeA), la institución educativa fue víctima de una nueva ola de amenazas que se extendió por más de diez años. Mientras este grupo armado señalaba a varios estudiantes de ser integrantes del ELN, las Farc intentaban captar la UdeA a través de acciones violentas y propaganda (Aldana, 2011). En los años posteriores se dieron homicidios, secuestros y amenazas, que afectaron particularmente a integrantes del claustro. En una línea de tiempo que contiene hechos de violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia, *Hacemos Memoria* registró entre mediados de los 90 y hasta 2006 más de cincuenta sucesos, la mayoría de ellos protagonizados por paramilitares.

La pregunta que surge a los intereses de este trabajo es: ¿Cómo puede el periodismo contribuir a rescatar esos hechos de violencia del olvido con el fin de comprender mejor la compleja trama del conflicto armado colombiano dentro de las universidades? Aquí conviene anotar dos cosas: por un lado, lo más importante de las noticias emitidas en los medios de comunicación no son los datos que entrega, sino las definiciones de realidad que instala en los receptores. Por el otro, está la cuestión por el modo más eficaz del periodismo para transmitir estas ‘versiones de la verdad’ que, casi siempre, desafían la historia oficial reforzada una y otra vez por los medios de comunicación.

Periodismo al banquillo

El investigador Daniel Guillermo Valencia considera que los grandes poderes

³ De la profesora Uribe de Hincapié vale la pena destacar el libro *Universidad de Antioquia: historia y presencia*, publicado en 1998.

⁴ Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá fue una organización paramilitar, contrainsurgente, de extrema derecha y narcotraficante. Se consolidó como grupo en abril de 1997 y estuvo activa hasta su desmovilización en el 2006. Fue liderada por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, y Salvatore Mancuso. Fue Carlos Castaño quien en 1997 dijo tener sus ojos en la UdeA y “prometió paz a condición de que la insurgencia también se mantuviera a raya” (Aldana, 2011, p. 208).

económicos de los que hacen parte los medios de comunicación en Colombia, “han incidido en la forma como se construyen los relatos del conflicto en la prensa nacional y local” (2014, p. 37). Sin desconocer el daño y sufrimiento causado por la insurgencia, estas relaciones han llevado a los reporteros a utilizar un lenguaje insuflado de patriotismo y a desarrollar unas prácticas periodísticas que son útiles para prolongar el conflicto, en vez de esforzarse por explicar las causas estructurales de la guerra y dar espacio al disenso de forma equilibrada.

Por décadas, los medios de comunicación colombianos mostraron a las guerrillas como las causantes de todos los males del país, y no ahondaron en el conflicto social, político y económico que había detrás de ellas. Muchos periodistas informaron sobre el conflicto desde las oficinas de prensa de comandos militares, y esto ayudó a encubrir la desproporcionada violencia del paramilitarismo en el afán nacional por destruir a las guerrillas. En palabras de Valencia, esto generó “un periodismo de declaraciones, de versiones, de reacciones, sin un ejercicio mínimo de verificación y de contrastación con los hechos, y menos con las voces de quienes sufren las consecuencias de la confrontación armada” (2014, p. 42). En síntesis, la desinformación sobre lo que en realidad pasaba en el campo, en las carreteras, en los pueblos, en las ciudades y, por supuesto, en las universidades, fue producto en gran parte de la manipulación del lenguaje y de la forma de cubrir el conflicto, es decir, de las prácticas periodísticas, lo que en la sociología de Bourdieu equivaldría al ‘habitus’ del reportero, que, ensimismado en la tarea de concretar audiencias, emitió noticias que dividieron peligrosamente a la sociedad entre “buenos” y “malos”, “gente de bien” y “revoltosos”, entre unos ideales de “progreso” y otros de “retraso”.

En *Sobre la televisión*, Bourdieu explica que en esta época de masificación de la producción de noticias y de lucha por las audiencias (entre mayor audiencia mayor y mejor publicidad), las noticias son meras descripciones sosas de eventos, muchas veces sin contexto, escritas en un lenguaje homogéneo y simplista, y con una serie de fuentes que funcionan como comodines, dispuestas a declarar a conveniencia de los intereses de los medios. Los sucesos y los problemas sociales son vistos por el periodismo como acontecimientos que no pertenecen al ámbito de lo político, cerrándole filas al pluralismo de opiniones, ejercicio que está en el corazón mismo del pensamiento democrático.

El periodismo de los grandes medios no solo entra en esta dinámica por su modo de producir noticias, sino porque dirige su discurso hacia el consenso, poniéndose en un supuesto lugar de moderador del equilibrio en nombre de la ‘paz’ de una nación y a favor del pensamiento hegemónico; cuando su papel, según la tesis de la investigadora de la comunicación Ana María Miralles, es bien distinto y tiene que ver con su capacidad de divulgar la pluralidad de voces para enfrentar discusiones que a todos los miembros de una sociedad interesan, buscando puntos de contacto entre los discursos y motivando el diálogo sincero.

Según la línea argumentativa de Miralles, la democracia debe hacer visible a los excluidos, a los disidentes, de modo que ellos puedan entrar en la arena de la controversia, que es el escenario propio del periodismo. Siguiendo el pensamiento de Keane, Miralles afirma: “La comunicación consiste en mostrar la mayor variedad posible de opciones sin colocar una por encima de otra” (2011, p. 167).

En su cubrimiento los medios de comunicación colombianos despolitizaron el conflicto, condenando cualquier tipo de manifestación en contra del gobierno a ser recibida como una afrenta a los ideales de patria difundidos desde las élites, y demonizando demandas de la ciudadanía que implicaban tocar los privilegios de los intereses económicos de los más poderosos, como sucedió, por ejemplo, en aquellos territorios en donde los campesinos reclamaron sus derechos cuando empresas de gran envergadura instalaron en sus territorios hidroeléctricas y otras iniciativas extractivistas que destruyen el medio ambiente. Allí, precisamente, el paramilitarismo intervino para acallar cualquier tipo de reclamo o crítica.

Esta programación en la forma de presentar las versiones de una noticia, como ya se dijo, moldeó la perspectiva de la opinión pública frente a las formas de resistencia del conflicto en las universidades públicas, lo que legitimó las capturas, la violencia y los allanamientos de la policía contra los universitarios. Era común, como quedó constatado en el informe *Fracturas del Alma Mater*, que los estudiantes detenidos fueran exhibidos ante los medios de comunicación como “terroristas” y “rebeldes” (2020, p. 144). En este documento también se explica cómo la “prensa entre 1998 y 2008 es depositaria de un repertorio de discursos que canalizan unas memorias en detrimento de otras”.

La Universidad de Antioquia no fue ajena a este tipo de prácticas periodísticas. En 1999, según la línea de tiempo de *Hacemos memoria*, los voceros de la Mesa Coordinadora de la U. de A. controvirtieron las continuas acusaciones de la prensa al movimiento estudiantil:

El 12 de junio de 1999 el periódico *El Colombiano* publicó un artículo titulado “La U. de A. no es como la pintan”. Según la publicación, las ideas recogidas en ese texto fueron resultado de una reunión de tres horas, en la que un grupo de estudiantes controvirtió un artículo de ese mismo medio, publicado el 3 de mayo de 1999, en el que, a juicio de los universitarios, *El Colombiano* estigmatizaba a la institución y a quienes hacían parte de ella. “Cuando leímos el artículo nos sentimos muy mal [...]. Nos discriminan por ser de la UdeA [...]. Parece ser delito pensar la problemática del país, tener espíritu crítico y hacer propuestas para el cambio”, dicen algunos apartados de la nota publicada el 12 de junio.

Durante los años posteriores, cientos de estudiantes recibieron amenazas, gran parte de ellas motivadas por la suposición de que “trabajaban” en connivencia con grupos subversivos como las Farc o el ELN con el fin de generar caos y enfrentar el establecimiento. *Hacemos Memoria* reporta que solo en marzo de 2006 fueron amenazadas 23 personas, entre estudiantes y profesores, por las Autodefensas

Universidad de Antioquia. En esos años los encapuchados entraban al campus y repartían panfletos en los que declaraban a miembros de la Universidad de Antioquia como objetivo militar. En el especial “50 años de violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia” de *Hacemos Memoria* se cuenta que:

El profesor Bladimir Ramírez, quien en ese entonces era estudiante de la Facultad de Derecho, recuerda que el día de la amenaza permaneció en la Universidad hasta tarde. Ese miércoles “yo estaba en el computador [de la oficina estudiantil de la Facultad de Derecho] y me acuerdo que subieron unos compañeros que me dijeron: ‘Blado, hay unos dos o tres capuchos raros de las autodefensas repartiendo unas cosas, unos comunicados’. Uno de los compañeros bajó, trajo un comunicado y era la amenaza. Entonces empezamos a decir: ¿cómo así?, pero ¿qué pasó?, ¿son los paracos?”, cuenta.

Bladimir narró que ese día “fue horrible”, puesto que por aquellos años “cada semana desaparecían o mataban a una persona. Fue una época muy represiva. Existía mucha estigmatización, señalamiento y persecución a los estudiantes”. Este tipo de testimonio es común escucharlo en personas que hicieron parte del movimiento estudiantil de esa época.

Unos años después, explica Valencia, comenzarían y avanzarían los diálogos en La Habana, en un contexto en el que las universidades públicas eran “un campo minado de miedo y de odio, por lo cual se demanda un cambio en las formas de ejercicio del periodismo” (2014, p. 43). Ese cambio exige, entre otras cosas, explicar los orígenes del conflicto, utilizando un lenguaje que convoque al diálogo sobre la paz, la reconciliación, el perdón y el ejercicio de la política como un campo deliberativo en donde todas las voces deben tener un espacio; en definitiva, se pide un periodismo comprometido con la democracia.

Para ello, “se necesitará un periodismo que fiscalice, indague y haga seguimiento al cumplimiento de los acuerdos (...). Un periodismo que contradiga y desmonte el discurso militarista y oficialista sobre los diferentes asuntos del acontecer público” (Valencia, 2014, p. 44). Y para que esto sea posible, es necesario ofrecer a las víctimas un lugar privilegiado en el debate, pues ellas son las portadoras de una historia nacional que por años los medios de comunicación dejaron de contar o contaron sin la profundidad del caso. De ahí la importancia, en el contexto en el que vivimos, del periodismo que trabaja por la memoria.

Periodismo y memoria

La promesa de un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua del mundo configuró un escenario renovado que demanda de las diferentes esferas sociales una disposición hacia lo que los medios han llamado ‘la reconciliación’. Y esta, por supuesto, no puede ser ajena a los relatos de las víctimas que, por alguna u otra razón, experimentaron los efectos colaterales del conflicto armado sin tener nada que ver en él directamente

o que vivieron la intimidación solo por defender ideales, o porque sus intenciones terminaron amenazando los intereses de quienes invirtieron grandes capitales.

Durante los diálogos en La Habana y luego de la firma del acuerdo, surgieron esfuerzos periodísticos por mostrar el rostro y enseñar la voz de quienes por años fueron silenciados: campesinos, indígenas, afrodescendientes, sindicalistas, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, desplazados, estudiantes y, en general, víctimas del conflicto. En estos últimos años el periodismo se ha aliado con la memoria para aportar a la comprensión de lo que pasó en ciertos momentos del conflicto y devolverle la dignidad a las víctimas por medio de la publicación de relatos que estuvieron silenciados durante décadas.

Para entender la relación entre periodismo y memoria partimos de la descripción propuesta por Nieto y Hernández en su artículo “El periodismo y sus trabajos por la memoria”:

(...) el periodismo que trabaja por la memoria asume la responsabilidad de conocer a fondo los hechos del pasado violento, darles sentido una vez ha comprendido todas las dimensiones de su complejidad, y comunicarlos con la intención de contribuir a la verdad, a la justicia y a garantizar la no repetición de las atrocidades (2020, p. 124).

Para Nieto y Hernández conocer a fondo los hechos del pasado de la violencia política supone “reconocer en el periodismo un mecanismo complejo que genera información interpretada sobre el pasado violento” (p. 133). El vehículo para este tipo de trabajos rigurosos es el periodismo narrativo o crónica, un estilo privilegiado para los periodistas que escriben “en clave de memoria pues esta se refiere al drama y el drama es corazón de la poética” (p. 143).

Asimismo, la investigadora y periodista María Eugenia Ludueña manifiesta que el periodismo reconstruye memorias para rescatar voces e historias del olvido, y con ello abre el camino de la dignificación. Esto sin dejar de reconocer que las memorias son lugares de disputas⁵ de sentidos y de lucha política.

El periodismo que narra la memoria dialoga con la historia y las ciencias sociales. Porque hablar de memoria no debería acotarse a contar un testimonio bajo la forma de un relato sensible, con un gran título. La construcción de memoria requiere de un trabajo complejo de análisis, documentación, registro, investigación. Las miradas oblicuas, transversales, híbridas o laterales, con el auxilio de diversas disciplinas de las Ciencias Sociales –la antropología, la sociología, las ciencias políticas– amplían el campo y permiten comprender mejor la trama en la que se inscriben las memorias (Ludueña, 2015).

⁵ Jelin asegura que: “Una hipótesis preliminar, que deberá ser objeto de investigación futura, relaciona los escenarios de la lucha por la memoria con la acción estatal. Cuando el Estado no desarrolla canales institucionalizados oficiales y legítimos que reconocen abiertamente los acontecimientos de violencia de Estado y represión pasados, la lucha sobre la verdad y sobre las memorias apropiadas se desarrolla en la arena societal” (2002, p. 61).

A partir de un trabajo titulado “Los archivos de la memoria. Testimonio, historia y periodismo” de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina, Ludueña señala dos responsabilidades esenciales del periodismo que trabaja por la memoria: la primera, “pensar el oficio desde la perspectiva de la responsabilidad enunciativa que implica ser investigador de hechos singulares, que deben ser reelaborados para producir el valor agregado de reconocerlos como hechos sociales”. La segunda responsabilidad tiene que ver con el deber de responder a los criterios de verdad que posee el periodismo “y de organizar narrativamente esas historias, con sus documentos, testimonios, datos, imágenes, fuentes adecuadas, de modo tal que generen interés en quienes los van a leer” (2015).

Los métodos y herramientas de investigación utilizadas para este fin son los empleados por el periodismo narrativo, que según el cronista Roberto Herrscher se alcanzan al adentrarse por completo en las posibilidades exploratorias que brindan las famosas ‘Seis W’: qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Cada uno de estos interrogantes sirve para explorar el objeto de estudio en tres niveles de profundidad, abordados conforme transcurre el trabajo de reportería. Para Herrscher (2012) el proceso creativo de escritura debe darse en una decantación de los hechos más relevantes a través de una voz propia y precisa:

Los grandes textos de periodismo narrativo tienen, creo, una enorme ambición escondida. No buscan solo informar, entretener o enseñar algo. Buscan el mayor objetivo al que puede aspirar un escrito: que el lector cambie, crezca, conozca no solo una parcela del mundo que desconocía, sino que termine conociendo una parcela de sí mismo que no había frecuentado (p. 36).

En la misma línea, el profesor e investigador Juan José Hoyos explica que, entre los géneros del periodismo narrativo, el reportaje busca:

(...) captar una historia con todos sus detalles, retratando de paso sus personajes, sus ambientes, recreando el drama que hay detrás de los hechos que se narran. Por ese afán totalizador, también es un punto de encuentro entre el periodismo, la literatura, la antropología, la historia, el arte y muchos otros campos del conocimiento ligados a las ciencias humanas (2003, p. 14).

Como se lee, el periodismo que trabaja por la memoria, ya sea en formato de crónica escrita o radial, a modo de documental o multimedia o gracias a las nuevas tecnologías, implica un trabajo serio, profundo, de “largo aliente”, para dejar atrás el modelo estándar de producción de la noticia que responde únicamente a las tensiones sociopolíticas de cada época (ya que los valores de la noticia cambian con los años), y emprender otras búsquedas.

Este texto entonces invita a los periodistas a adentrarse en la investigación de fenómenos como la ‘amenaza de muerte’ en el ámbito universitario. Explorar y narrar lo que pasó con estos mensajes intimidatorios no solo contribuiría a la comprensión del conflicto dentro de las universidades públicas y a contar cómo

esta violencia afectó la vida de sus integrantes, también ayudaría a conformar esa gran historia memorial en la que trabaja la Comisión de la Verdad, cuyo propósito es buscar “el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuya a sentar las bases para la no repetición”.

Este periodismo no solo quiere aportar a “una paz estable y duradera”, mostrando aquellas realidades que por años estuvieron ocultas y con ello devolverle parte de la dignidad negada a las víctimas, también quiere aportar al debate sano con un alto grado de principios éticos y plurales, con el fin de que alguna vez seamos el país próspero que todos merecemos.

Dar voz al pasado

Como se ha podido deducir, la actualidad del periodismo que trabaja por la memoria es el pasado. Esto supone un cambio sustancial en la teoría y en la práctica del periodismo, ya que el valor de la actualidad, como cualidad informativa, cambia y deja de ser el principal filtro para determinar la selección de los hechos que constituyen la agenda informativa.

El periodismo se inscribe en la memoria cuando decide dar voz a las víctimas del conflicto armado. Cuando toma un respiro y elige otro camino. Nieto y Hernández aseguran que los periodos de transición de la violencia política en las décadas del 70 y 80 en países de Latinoamérica por cuenta de dictaduras, confrontaciones armadas y la desigualdad social, propiciaron el escenario para el surgimiento de este tipo de relatos memoriales (2020, p. 129). Asimismo, las víctimas, reconocidas como nuevos actores sociales, hicieron de la memoria una herramienta política para exigir verdad y justicia.

Estos autores también reconocen que el periodista que trabaja por la memoria no ve a las personas-testigos de hechos violentos como fuentes, sino como personajes víctimas que se abordan desde una consideración ética. El reportero convencional consulta ‘fuentes’, expertos, testigos, poderosos o víctimas de esos poderosos, que “aparecen y desaparecen de nuestros textos sin que podamos verlas ni entenderlas. No cuentan ni recuerdan ni reflexionan [...] están en el no-lugar y el no tiempo de las declaraciones”, dice Herrscher citado por Nieto y Hernández (2020, p. 141). Extraer a los personajes de esa ‘nada’ sin rasgos es la tarea principal del trabajo de la memoria, lo que supone “no solo entender y respetar la altura moral de quienes han sufrido, sino también situarse en un escenario jurídico y político en el que han asumido una nueva identidad: la de víctimas” (p. 141).

Los periodistas que rescatan la memoria se libran de las cadenas de la agenda diaria que selecciona unos hechos ‘noticiosos’ y excluye otros, estandarizando el marco

de realidad y conocimiento transmitido a los consumidores de noticias. Miralles explica que según Lippmann, esto “produce el necesario efecto simplificador de la realidad para captar la atención del público hacia las etiquetas simples que resuelven los problemas de cognición de la complejidad de la realidad social” (2011, p. 110). Esta mirada simplista, producto de las rutinas periodísticas del día a día, excluye la mirada pluralista de los acontecimientos y conlleva a la transmisión de versiones parcializadas que dificultan el derecho ciudadano de estar bien informado sobre asuntos de interés público. Esta atmósfera informativa crea un clima de opinión que entorpece la emergencia de otras interpretaciones de los asuntos, casi siempre descritos por la oficialidad y los ‘expertos’ mediáticos. El periodista que pretende abordar una historia en clave de memoria escapa de estos parámetros.

Pero, ¿qué se entiende por memoria, y en este caso, memoria colectiva? Según el sociólogo francés Maurice Halbwachs, es un proceso social en el que se reconstruye un pasado en el presente con una alta carga de significados. En su libro *La memoria colectiva*, Halbwachs expresa que “podemos hablar de memoria colectiva cuando evocamos un hecho que ocupaba un lugar en la vida de nuestro grupo y que hemos planteado o planteamos ahora en el momento en que lo recordamos, desde el punto de vista de este grupo” (2004, p. 36). En síntesis, la memoria es por naturaleza compartida.

En esta misma línea, la socióloga Elizabeth Jelin añade que, en tanto es compartida, la memoria constituye un campo de disputa política: “El pasado, entonces, puede condensarse o expandirse, según cómo esas experiencias pasadas sean incorporadas” (2002, p. 26). De hecho, por esta misma disputa es que se han desatado en nuestro país guerras silenciosas entre víctimas, victimarios y el Estado. De este choque de tensiones entre distintos sectores nace el sentido del periodismo que trabaja por la memoria, donde la sensibilidad y el rigor investigativo son prioridad, y en donde las víctimas ya no son vistas como simples fuentes testimoniales, sino como personas cuya dignidad debe ser redimida del peso de las ‘verdades’ oficiales, legitimadas por años gracias a los medios de comunicación y a la opresión que ha causado la violencia política y simbólica, en el caso que nos atañe, ejercida por el paramilitarismo en connivencia con los gobiernos de turno.

Esta misma perspectiva puede ser abordada desde Bourdieu. Según el sociólogo, el Estado detenta de modo legítimo varios tipos de capital, entre los más importantes: el simbólico, el de la fuerza y la coacción, el cultural, el económico y el de la información. Estos capitales, que modelan en parte la constitución de identidad de una sociedad, tienen una doble dimensión, en lo físico y en lo simbólico, en las cosas y en los cuerpos, lo que le permite legitimar su dominación ante la aceptación de la sociedad, quien aprecia todo lo que surja del Estado como una condición para su orden y equilibrio, por lo regular sin cuestionamiento. A esto último Bourdieu le dio el nombre de violencia simbólica (Gutiérrez, 2004).

Este capital es el más sólido, subterráneo e invisible de todos, pues es el que le permite al gobierno mantener su estatus, su omnipotencia ante la sociedad y le entrega, entre otras cosas, legalidad total del uso de la fuerza física. Esta violencia simbólica recae en las diferentes esferas de la sociedad, como un regulador que actúa con la complicidad del sometido. Es, en suma, una “estructura organizadora e instancia reguladora de las prácticas, que se ejercen mediante las imposiciones y disciplinas a las que somete uniformemente al conjunto de los agentes” (2004, p. 54). De este modo, este capital se instala en los diferentes sectores de una sociedad, es decir, en los territorios de acción donde confluyen relaciones sociales y en donde, a su vez, hay un juego de roles específico en el cual los individuos (en nuestro caso, comunidad universitaria, agentes del Estado, gobernantes, paramilitares, etc.) se desenvuelven, aprenden, trabajan, escalan socialmente y adquieren un modo particular de habitar su mundo. A esos sectores Bourdieu les llamó “campos”, por lo que podemos entender que existe el campo del arte, de lo político, de la medicina, de la ciencia, de los medios de comunicación, de lo universitario, entre otros. Estos campos interactúan entre sí en un juego de roles y disputas que, para el propósito de este ensayo, ya fue esbozado.

El campo universitario, por supuesto, no escapa de la llamada violencia simbólica. Según Portela, habría primero que partir del hecho de que las universidades públicas pasaron de ser consideradas por los gobiernos como bienes públicos a ser reducidas a un campo de valoración del capital educativo. Portela cita al sociólogo portugués Boaventura de Sousa para explicar que esto se debe al proyecto global de transformación que el modelo neoliberal, poco a poco, ha ido instalando en las políticas de educación desde principios de los años 80 y que ha terminado en nuestros días en un mercado transnacional de educación superior.

Según Portela, “la universidad colombiana no es ajena a este proceso. En los veinte años más recientes, el Estado se ha ido retirando paulatinamente tanto de la política social como, en particular, de la educativa” (2015, p. 120). Lo que ha derivado en que desde el 2003, por ejemplo, las universidades públicas manifiesten su iliquidez financiera, una deuda que ha venido creciendo con los años y que se sumó a la implementación de sistemas de evaluación (exigidos por expertos externos) ligados a programas y esquemas presupuestales gubernamentales, en una especie de lucha por los recursos. Estas crisis, por supuesto, son contestadas desde las luchas estudiantiles y sociales que reclaman una universidad pública autónoma al servicio de los estudiantes de escasos recursos.

En este contexto de desfinanciación entraron la insurgencia y el paramilitarismo a las universidades públicas. Los campus universitarios se convirtieron en uno de los principales escenarios donde se debatía abiertamente la política gubernamental, se cuestionaba la posición de la administración central, en este caso la de la Universidad de Antioquia, y se denunciaba públicamente la ola criminal por la que pasaba el país y la universidad misma.

Fue entonces cuando el gobierno respondió con una nueva criminalización de la protesta estudiantil, despolitizando las ideas emergentes y ejerciendo una violencia política sobre quienes se atrevían a cuestionar sus decisiones. Uno de los puntos más críticos de esta situación se dio en 1996 cuando las Autodefensas Universidad de Antioquia (AUdeA) sacaron un panfleto en el que señalaban a tres estudiantes de ser miembros del ELN. Ese mismo año en las instalaciones de la universidad se presentaron varios actos violentos protagonizados por miembros de las Farc y el ELN, además del secuestro de una estudiante de artes por parte de grupos paramilitares⁶ (Aldana, 2011, p. 208).

Estos hechos desencadenaron un ataque frontal contra activistas universitarios y líderes estudiantiles. La violencia política buscó el sometimiento de estos líderes a través de un repertorio de terror: amenazas, homicidios, detenciones arbitrarias, señalamientos y persecuciones, dinámicas relacionadas con el contexto violento de la ciudad cuyo génesis podría situarse con el posicionamiento mismo del narcotráfico (Yepes, 2017, p. 57).

A continuación, se presenta un relato protagonizado por Carlos Olivares, destacado líder estudiantil que fue amenazado por paramilitares a finales de los años noventa junto a seis estudiantes más. Esa amenaza lo obligó a cambiar el rumbo de su vida.

“Yo debería haber muerto”

Hace ya muchos años un hombre con mi mismo nombre, lo que llamamos un tocayo, llegó a mi consultorio para una revisión médica. Nos saludados con cierta efusión por la coincidencia que nos unía y quizá por eso me convertí luego en su médico de confianza. Varias citas después supe que había sido estudiante de derecho en la Universidad de Antioquia en los años 80, una especie de líder, y, por supuesto, le pregunté cómo vivió esa época tan cruda en la cual mataron a manojos a estudiantes y profesores, años de procesiones tristes en las cuales cualquier expresión de izquierda era vista como una amenaza. Él me miró con picardía y me contó que el gran susto de su vida había ocurrido a principios de 1999, cuando su nombre apareció en una lista de estudiantes amenazados por el paramilitarismo, acusado de ser un mal estudiante, cuando él llevaba ya al menos diez años graduado.

Nunca le confesé que en realidad a quien habían amenazado era a mí. Al contrario,

⁶ Para finales de los 90, Castaño había consolidado a nivel nacional una estructura paramilitar basada en la unificación de varios bloques, con miles de hombres armados, un Estado Mayor y una concepción directamente contrainsurgente. Su hombre en Medellín era Don Berna, quien controlaba la zona nororiental y sur de la ciudad por medio de la banda La Terraza. Sin embargo, esto no era suficiente para Castaño. Berna en esencia no era un contrainsurgente, era un narco y un jefe de sicarios a sueldo (Yepe, 2017, p. 26)

le dije animado: “¡Cómo va a ser!”. Y me dijo: “Sí, hermano, ¿y sabe que me tocó hacer? Me tocó pedir cita con Carlos Castaño y preguntarle por qué me había amenazado”. Yo lo escuchaba atónito. Continuó diciendo que, en efecto, Castaño le concedió un encuentro, sabe Dios dónde, y le reconoció que el hecho debía ser una equivocación: “Voy a llamar a los muchachos para que te borren de la lista”, dijo el jefe paramilitar. La anécdota era divertida y mi tocayo y yo nos reímos. Decidí entonces ser prudente y no hablar sobre ese pasado mío que había dejado en la sombra. No sé si el cuento habrá sido verdad, pero eso también muestra hasta qué punto una amenaza puede cambiarle la vida a alguien.

El sentimiento de zozobra que causa una amenaza lo conozco bien. El Carlos Olivares que apareció en una lista con seis estudiantes más era yo. Allí también aparecieron Jorge, Carmaña, Navarro, Maruco, dos personas más cuyo nombre olvidé y Gustavo Marulanda. Recuerdo que la misiva tenía tres hojas y al menos en página y media hablaban de Marulo, como si fuera un eleno, un guerrillero. Cosas de la vida, yo hasta ese momento no tenía una amistad fuerte con él; lo conocía, claro, era algo impulsivo y compartimos en muchos escenarios de lucha y resistencia, pero ese panfleto fue el que nos unió por unos meses, hasta que fue asesinado en agosto de 1999. Y pensar que unas semanas atrás, cuando me estaba graduando de médico en el Teatro Camilo Torres, Marulo quiso dar un discurso felicitándome por mi trayectoria como líder estudiantil. No se lo permití. Cuando supe de su muerte, yo estaba internado en el Chocó, trabajando en brigadas de salud, atendiendo a comunidades indígenas y negras, exiliado a mi manera. Porque algunos de los que aparecieron en la lista negra conmigo viajaron a Canadá o a algún país de Europa.

Estando allá en el Chocó me pregunté muchas veces por qué no me mataron, y es que el movimiento estudiantil de ese momento era enorme, convocábamos asambleas y llenábamos el teatro, discutíamos sobre la violencia que se presentaba en la ciudad, llamábamos a la neutralidad de la Universidad frente a la confrontación armada, organizábamos jornadas de paz y reflexión por la desaparición de estudiantes y el asesinato de profesores como Hernán Henao o líderes como Jesús María Valle; pintábamos en las paredes, realizábamos actos simbólicos, hacíamos canelazos, algunas veces marchábamos y otras veces no nos dejaba la policía y entonces amanecíamos dentro de la U... Sabíamos que la U podría estar infiltrada por paramilitares, pero eso no nos importaba; uno joven piensa en la muerte de otro modo.

A Quibdó llegué por el profesor Enrique Rentería, miembro en ese entonces del Consejo Académico de la UdeA. Enrique me detuvo un día y me dijo: “Marica, no te vayas del país, venite para el Chocó, a mi casa, y eso sí, juicioso, no te pongás a hacer maricadas y trabajás como médico, tenés mi apoyo”. Él sabía que yo quería seguir en Colombia y continuar mis estudios, soñaba con ser un cirujano, admiraba a los del San Vicente de Paúl que tenían la reputación de ser magos en el quirófano,

con la capacidad casi que de revivir muertos. Yo andaba medio paranoico, sentía que me perseguían y acepté la propuesta con la esperanza de regresar a los meses a Medellín, a la Universidad de Antioquia, a realizar una especialización. Pero pasaron siete años antes de atreverme a pisar de nuevo esta ciudad.

A la de Antioquia yo entré como estudiante de medicina en el segundo semestre de 1991. Yo vivía en el barrio Manrique Oriental, cuatro cuadras arriba del Parque Gaitán. Venía de Riohacha y en Medellín comencé a caminar todo el día con el único par de zapatos que tenía. Me sorprendió la belleza verde de las instalaciones de la U, pero sobre todo que en cada pasillo se hablaba casi a gatas de los asesinatos, las desapariciones, las torturas y las detenciones policías que muchos estudiantes y profesores habían vivido en los 80. Yo era un pelado sin el más mínimo contacto con la historia, ni con teorías y mucho menos con el pensamiento de izquierda; aunque sí me habían dolido mucho las muertes de miembros de la Unión Patriótica sin tener muy claro sus pensamientos e ideas. En ese entonces solo éramos mis zapatos, mi silencio y yo en la universidad, porque era muy tímido.

Mientras estudiaba conocí mejor la historia de la U. Para ese entonces el movimiento estudiantil no contaba con más de cuarenta integrantes, entre otras cosas porque la U había sido cerrada casi un año a finales de los 80 luego de una ola de asesinatos y amenazas y eso había disuelto por completo cualquier tipo de manifestación estudiantil. Pero pronto muchos estudiantes tuvimos razones para organizarnos. Recuerdo que hubo debates en torno a la Ley 30 del 92, con la que pretendieron privatizar la U. Luego nos organizamos para estudiar y debatir la Ley 100 del 93. Éramos pocos los que estudiábamos para confrontar en público leyes polémicas y reclamar ayudas para los estudiantes más necesitados, o simplemente para pelear alguna decisión tomada por un decano. Como queríamos llamar la atención de más estudiantes sobre las problemáticas de la institución se nos ocurrió llevar a cabo algo que hoy está muy de moda: organizar actos simbólicos como teatralizar el entierro de la universidad pública. Nos disfrazábamos y terminábamos pareciéndonos a integrantes del Ku Klux Klan. En menos de un año, lo que comenzó como un grupo pequeño de estudiantes preocupados por la universidad pública y sus políticas, se convirtió en el movimiento estudiantil, un grupo nada homogéneo que llegó a tener discursos de todo corte político.

Por supuesto, ya en esos primeros años de reorganización del movimiento estudiantil nos sentíamos señalados y seguían dándose homicidios de miembros de la U. Recuerdo incluso que en octubre del 93 hicimos una huelga de hambre que duró doce días, y el rector de aquella época, Rafael Aubad, quería que las autoridades policiales hicieran presencia para sacarnos. Cuando se acabó la huelga quisimos seguir con un campamento y nos cayó la IV Brigada con Rito Alejo del Río, quien en ese momento le pidió a uno de sus hombres que le enseñara las pruebas de que nosotros éramos guerrilleros y el tipo sacó un afiche

de Bob Marley. Recuerdo que el mismo Rito Alejo se puso furioso, y delante de nosotros regañó al supuesto investigador: “¡Pero si hasta mis sobrinas tienen ese afiche en su cuarto!”, le dijo. A nosotros nos reseñaron, éramos cerca de cien, y algunos compañeros que estuvieron ahí me afirmaron mucho tiempo después que desde ese día sus vidas se arruinaron.

A mí me comenzaron a llamar ‘Negro’, porque soy negro, y porque comencé a tener cierto reconocimiento por hacer parte de los eventos estudiantiles. Me tomé confianza. Muchos años después, ya graduado, un viejo amigo de esa época, miembro activo en el movimiento estudiantil, me confesó que yo en esas parecía El auto fantástico, dizque porque era negro y hablaba, y hablaba muy mal, enredado, sin que se me entendiera mucho. Me pareció un comentario racista pero ahora pienso que de eso se trata la vida, de aprender, y llegué a ser reconocido en todo el país por mi determinación en el movimiento estudiantil. Y seguro dentro de la administración de la Universidad no faltó a quien yo no le cayera bien.

Otro hecho que tengo en la memoria tiene que ver con la pelea que le dimos al rector Jaime Restrepo que quería implementar el Icfes como mecanismo de entrada de los nuevos estudiantes, dejando de lado el examen de competencia lectora y lógica matemática. Realizamos debates fuertes y convocamos a jóvenes de los colegios más grandes de Medellín para que participaran. Un día decidimos protestar en contra de la medida al lado de Barranquilla. Esa vez unos pelados del Pascual Bravo se unieron al tropel, y la cosa se puso tan intensa que llegaron los antinarcóticos a dispararnos casi que a matar. En algún momento se dio un tremendo silencio. Nosotros estábamos acostados en el suelo. Supusimos que los militares se habían quedado sin munición y recargaban sus armas. Cuando menos pensamos un pelado del Pascual salió corriendo hacia la reja de la puerta principal y pegó un grito que se escuchó en toda la universidad: “¡Ríndanse que están rodeados!”. El tropel siguió varias horas más. Debo señalar que nunca fui bueno para tirar piedras y cuando lo intenté casi descalabro a un compañero, así que mi tarea era en realidad atender a los estudiantes que iban quedando heridos en la trifulca.

Con el homicidio de Jesús María Valle y luego con algunas explosiones que se dieron dentro de la Universidad, era imposible no sentirse asechado, y más uno como líder estudiantil. Yo, como muchos de mis compañeros, teníamos una determinación de vida. Pensábamos que íbamos a terminar muertos, era una especie de sentimiento un tanto depresivo. Teníamos compañeros asesinados, otros encarcelados y otros más desaparecidos. Cuando fui amenazado todo el tiempo tenía miedo, incluso salir de la universidad era un procedimiento: caminaba hasta la entrada del ferrocarril, me devolvía, entraba a un baño, iba de un lado a otro, iba al bloque cinco por el segundo piso, me detenía a mirar por los ventanales, bajaba y luego salía por la portería de Ferrocarril. Todos los días cambiaba de camino y de rutas. Era lo que había que hacer. No le daba el

teléfono a nadie ni me tomaba fotos. De hecho, yo no tengo fotos de cuando estuve estudiando. Cuando llegué al Chocó creía que debía haber muerto por esos años, porque otros lo habían dado todo. Entonces, me preguntaba: “¿Por qué? ¿Por qué hijueputas sobreviví?”. Esa era la recriminación que me hacía cada vez que me emborrachaba, porque empecé a beber como loco en ese aislamiento, y solo llegué a superar la bebida en el 2013, cuando me dije: “Ya no más”.

Referencias bibliográficas

- Aguilera, Armando. (2003). Las secuelas emocionales del conflicto armado para una política pública de paz. *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales*, 10, (31).
- Aldana, Andrea. (2011). Memorias de crisis para una universidad en conflicto. *Kavilando*, 2, (2), pp. 113-212.
- Bermúdez, Suzy. (2001). La universidad y la paz en Colombia. *Nómadas*, (4), pp. 209-222.
- Bourdieu, Pierre. (1997). *Sobre la televisión*. Barcelona: Editorial Anagrama.
- Cátedra Basta ya. Colombia: Memorias de guerra y dignidad. (2013). Centro Nacional de Memoria Histórica. Bogotá: Imprenta Nacional.
- Colombia, Ley 599 del 2000, Código Penal.
- De Fontcuberta, Mar. (1995). *La noticia. Pistas para percibir el mundo*. Barcelona: Paidós.
- Fernández, Juan Manuel. (2005). La noción de violencia simbólica en la obra de Pierre Bourdieu: una aproximación crítica. *Cuadernos de Trabajo Social*, 18, 7 - 31.
- Genocidio político, extendido, continuado, sistemático y premeditado: Victimización de la Universidad Industrial de Santander en el marco del conflicto armado (1947 - 2011). (2020). Corporación Credhos.
- Giraldo Marín, Diana Carolina. (2019). Universidad de Antioquia como centro de la violencia política de los años 80: quinquenio 1987-1991. Monografía para optar por el título de Socióloga. Universidad de Antioquia, Medellín.
- Gutiérrez, Alicia. (2004). Poder, habitus y representaciones: recorrido por el concepto de violencia simbólica en Pierre Bourdieu. *Revista Complutense de Educación*, 15, (1), pp. 289-300.
- Hacemos Memoria. Cincuenta años de violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia [en línea]. Disponible en: <https://hacemosmemoria.org/udea50/>
- Halbwachs, Maurice. (2004). *La memoria colectiva*. Zaragoza: Prensas Universidad de Zaragoza.

- Herrscher, Roberto. (2012). *Periodismo narrativo: cómo contar la realidad con las armas de la literatura*. Barcelona: Universidad de Barcelona.
- Hoyos, Juan José. (2003). *Literatura de urgencia*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Jelin, Elizabeth. (1998). *Los trabajos de la memoria*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Jiménez Ortega, Muriel; Corena Puentes, Edwin y Maldonado, Christian. (2020). *Las Fracturas del Alma Mater. Memorias de la violencia en la Universidad del Atlántico 1998-2010*. Puerto Colombia: Sello Editorial Universidad del Atlántico.
- Ludueña, María Eugenia. (2015, abril 14). El periodismo que narra la memoria. Cero Setenta.
- Marco conceptual del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. (2016). Centro Nacional de Memoria Histórica.
- Marco Conceptual. Noche y Niebla. (2017). CINEP-PPP.
- Miralles, Ana. (2011). *El miedo al disenso*. Barcelona: Editorial Gedisa.
- Nieto, Patricia y Hernández, Yhobán. (2020). El periodismo y sus trabajos por la memoria. En: P. Nieto, (Ed.), *Memorias: conceptos, relatos y experiencias compartidas*, pp. 123-149. Medellín: Fondo Editorial Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia
- Portela, Juan Camilo. (2015). Contienda política estudiantil. Apuntes desde la Universidad de Antioquia. En: *Universidad y conflicto: memorias*, (pp. 169-197). Medellín: Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
- Recéndez, María Cristina y Acosta Reveles, Irma Lorena. (2015). El campo universitario: manifestaciones de la violencia simbólica, una reflexión desde Bourdieu. En E. Cerros, V. Sieglin y I. Acosta (Eds.), *Políticas educativas y construcción de subjetividades en universidades*. Ciudad de México: AM Editores y Clave Editorial.
- Valencia Nieto, Daniel Guillermo. (2014). Los medios en el escenario del conflicto y lo político. *Revista Colombiana de Bioética*, 9, (2), pp. 35-44.
- Yepes, Daniel. (2017). Movimiento estudiantil y político en un contexto de guerra. Crónica de una generación extraviada en Medellín 2002-2010. Tesis para obtener título de Politólogo. Universidad de Antioquia.